

# ¿Es posible la supervivencia del movimiento obrero corporativista alemán?

**Ingo Schmidt**

**E**n septiembre de 2005 hacía ya siete años que en Alemania gobernaba una coalición de centro-izquierda, un Gobierno elegido en 1998 porque la mayoría del electorado estaba cansado de las promesas conservadoras según las cuales una política de austeridad fiscal, reducción de las prestaciones por desempleo y de la seguridad social y limitación de los aumentos salariales traería prosperidad y conduciría al pleno empleo. Sin embargo, el programa de ese nuevo Gobierno había logrado que el de sus predecesores pareciera un neoliberalismo con rostro humano. El nuevo Gobierno, liderado por el Partido Socialdemócrata Alemán (SPD), había lanzado los ataques más virulentos contra las condiciones sociales y laborales desde la instauración del estado del bienestar tras la Segunda Guerra Mundial. Dado que, a lo largo de la mayor parte de su historia, el SPD se ha presentado a sí mismo como la principal fuerza de presión para el avance del estado del bienestar, las acciones emprendidas contra los obreros han decepcionado profundamente a sus seguidores y han sorprendido a sus oponentes.

El desmantelamiento del estado del bienestar al que hacemos referencia ha provocado un fuerte descenso de la aprobación del electorado y de los afiliados al partido, además de desencadenar una oleada de protestas masivas. Sin

---

• Artículo publicado en *MR*, vol. 57, nº 4, septiembre de 2005, pp. 49-62. Traducción de Joan Quesada. Ingo Schmidt es profesor de economía en la Universidad de Northern British Columbia en Prince George y coeditor de *Goettinger Betriebsexpress*, publicación obrera alemana de carácter local. Es miembro de la Junta Consejera Científica de ATTAC-Alemania. Ejerce, además, de formador sindical.

embargo, no ha provocado la aparición de un movimiento capaz de desafiar al Gobierno.

No fueron las protestas en las calles, sino una serie de aplastantes derrotas en las elecciones provinciales, lo que acabó por llevar al Gobierno federal a convocar nuevas elecciones, un paso que provocó una situación paradójica. Por un lado, todo el mundo esperaba que la Unión Cristiano-demócrata (CDU) ganara las elecciones. Por otro, no hay duda de que estos no harán sino continuar con la política neoliberal que empezó por provocar el declive del SPD. Un modo de explicar esa aparente contradicción es atendiendo a la distinta capacidad de ambos partidos para movilizar a sus electorados. Mientras que la CDU puede obtener apoyos en diversos estratos sociales, el SPD ha sufrido fuertemente la pérdida del apoyo obrero y de los desempleados. Al contrario de lo que algunos podrían esperar, la CDU no es un partido unilateral de clases altas, sino que incluye también corrientes favorables al estado del bienestar. La hegemonía neoliberal en Alemania nunca había sido tan absoluta. Al mismo tiempo que se acepta ampliamente la necesidad prevista de mejorar la competitividad internacional, existe también una fuerte «atracción por el estado del bienestar». Se trata de un consenso contradictorio profundamente arraigado en la historia de la Alemania (Occidental) de la posguerra y que resulta de crucial importancia para cualquier desarrollo político. Los sindicatos han jugado un papel destacado en la creación y transformación de ese consenso basado en un crecimiento orientado a la exportación y una moderación corporativista en las relaciones entre trabajo y capital.

Frente al giro neoliberal del SPD, hay una facción dentro de los sindicatos que ha optado por mantener la alianza con el Partido Socialdemócrata. Sostienen que es la única forma de defender la existencia misma del estado del bienestar en contra de los conservadores. Contra esa postura, otra facción más reducida ha optado por un sindicalismo más orientado a la movilización. Algunos sindicalistas han llegado incluso a emprender la creación de un nuevo partido. Después de la convocatoria de nuevas elecciones en mayo de 2005, los líderes sindicales han devuelto su apoyo al SPD, al que describen como el menor de los males. Los intentos de crear una alternativa electoral atractiva para los antiguos votantes del SPD siguen en marcha, tolerados por los sindicatos, pero sin su respaldo. Dada la tradición de los sindicatos alemanes de reprimir cualquier desviación de su línea oficial, el hecho podría contemplarse como un avance hacia una mayor apertura y una mayor democracia sindical. En realidad, lo que indica es la pérdida de voz de los sindicatos en la política parlamentaria.

El descenso de la importancia política de los sindicatos ha animado a los capitalistas a desafiar ciertos principios de la negociación colectiva que estaban bien establecidos. Hasta hace muy poco, los sindicatos exigían el aumento de los salarios y la reducción de la jornada laboral, mientras que los patronos

intentaban contener ambas reivindicaciones. Ahora los patronos han tomado la iniciativa para exigir la reducción salarial y la extensión de la jornada laboral. Ante la amenaza del cierre de industrias, los sindicatos han aceptado con frecuencia el deterioro de las condiciones de trabajo y salariales a cambio de garantías de mantenimiento de los puestos de trabajo durante un tiempo limitado. En comparación con la importancia de dicho ataque al corazón mismo de los sindicatos, la participación esporádica en campañas y protestas parece poco esperanzadora.

La situación descrita plantea dos interrogantes. En primer lugar, ¿es posible que el vaciado de las instituciones básicas del estado del bienestar a lo largo de las tres últimas décadas acabe llevando a su abolición? Y, en segundo lugar, ¿allanarán el camino hacia un nuevo enfoque de la política obrera las actuales crisis del SPD y el movimiento sindical? Al ocuparnos de ambas cuestiones, exploraremos las hipótesis que exponemos a continuación. La historia de los trabajadores y del estado del bienestar en la posguerra se ha caracterizado por un alto grado de continuidad institucional. Sin embargo, la reducción sostenida del ritmo de crecimiento económico ha provocado un descenso de las condiciones sociales y la erosión de la base social del estado del bienestar. Aunque instituciones como la seguridad social y la negociación colectiva es posible que sobrevivan a los actuales ataques contra el estado del bienestar, también es posible que esas mismas instituciones contribuyan a generar efectos que alteren en lo fundamental el carácter del sistema. La integración social de la mayoría de los trabajadores que supuso el estado del bienestar es posible que se vea reemplazada por la exclusión de un número cada vez mayor de personas de lo que antes se entendía como su justa parte en la riqueza colectivamente producida. De ser un conjunto de instituciones que integraba a la clase obrera en el sistema capitalista, a la vez que elevaba las condiciones sociales de los trabajadores, el estado del bienestar podría convertirse en un instrumento de defensa de los privilegios de una nueva clase media surgida como producto colateral de ese mismo sistema. Igualmente, sostendré que existe algo así como un fetichismo institucional, muy arraigado en las corrientes principales del movimiento obrero alemán, que representa un gran obstáculo al que deberá hacer frente cualquier tipo de lucha que pretenda tener un cierto éxito contra todos esos desarrollos.

Para entender el movimiento obrero y el estado del bienestar corporativista del que ha llegado a formar parte integral la corriente principal de dicho movimiento, hay que tener presente la herencia feudal incorporada por esos dos fenómenos modernos. En Alemania, el feudalismo venía marcado por un poder político descentralizado, en manos de unos cuantos príncipes regionales, por encima de los cuales existía un débil poder central, así como por la autonomía económica separada de la ciudad medieval, que permitió el desarrollo de unos gremios artesanos ricos y poderosos. Tal separación ha quedado reflejada en la

estricta división del trabajo dentro del movimiento entre el SPD y los sindicatos. La principal preocupación *política* del movimiento obrero ha sido la transformación del estado feudal en un estado democrático, lo que en los primeros tiempos del SPD solía llamarse un «estado popular». Como reacción a la fragmentación del poder propia del feudalismo, el SPD defendía la unidad de la masa del pueblo, ignorando a veces las líneas divisorias de clase, como base social del estado democrático. El objetivo de dicho estado era mejorar las condiciones de los trabajadores por medio de la legislación. Los sindicatos, por su parte, debían concentrarse en la negociación colectiva con los patronos. Su tarea no era movilizar a los trabajadores para la acción política, sobre todo no para realizar huelgas políticas. Dado que los sindicatos surgieron en origen a partir de los gremios artesanos medievales, no sólo estaban preparados para asumir un papel estrictamente *económico*, sino que también desarrollaron una fuerte ideología productivista que hacía que les resultara casi imposible organizar a los obreros no cualificados.

La separación entre el SPD y los sindicatos se volvió gravemente problemática al inicio de la Primera Guerra Mundial, cuando el partido aprobó los créditos que el Gobierno había solicitado al Parlamento para financiar la agresión imperial, mientras que los líderes sindicales no estaban en disposición de emprender acciones políticas de manera autónoma. Durante los primeros años de la guerra, la izquierda del partido y los sindicatos, que más tarde fundarían conjuntamente el Partido Comunista, carecían tanto de una masa de seguidores como de capacidad organizativa. Las cosas se volvieron aún peores después de la guerra. El SPD veía la República de Weimar como la encarnación de su visión de un estado popular, y el movimiento obrero no osaba romper las normas parlamentarias de la República, ni siquiera cuando la única forma de detener el ascenso del nazismo al poder habría sido emprender acciones de masas como, por ejemplo, una huelga general.

Las huellas del feudalismo en el movimiento obrero y el estado del bienestar han comportado, en resumen, una fuerte diferenciación entre la lucha política y la económica. La primera se ha limitado a la actividad parlamentaria, mientras que la segunda se ha concentrado en buena medida en los trabajadores cualificados y ha dejado casi en los márgenes a las capas inferiores de la clase obrera.

El capital también lleva la impronta del feudalismo. La herencia feudal se refleja en la adopción del sistema gremial artesano de formación industrial, complementado con la educación teórica universitaria, y lo que propician ambos son innovaciones incrementales dentro de unas vías establecidas de desarrollo tecnológico. Sólo con la llegada del capitalismo industrial se producen en Alemania una serie de innovaciones radicales que provocan la aparición de las industrias química y automovilística. Aun así, el hecho de que ambos sectores sigan todavía encabezando la economía alemana demuestra la prepon-

derancia de las innovaciones incrementales sobre las radicales. El tercer sector líder, el de las máquinas-herramienta, surgió directamente de los oficios artesanales medievales y, en consecuencia, en él predominan la pequeña y mediana empresa, mientras que en los sectores químico y automovilístico lo que predomina son las grandes corporaciones. En la fase inicial de estas dos últimas industrias lo preponderante era la concentración horizontal, en oposición a la concentración vertical característica de las grandes corporaciones norteamericanas. Durante un tiempo, el predominio de las fusiones horizontales favoreció el mantenimiento prolongado de unas mismas formas de organización del trabajo, entre ellas la utilización de obreros cualificados. Incluso después de que se generalizaran las cadenas de producción, la degradación del trabajo propia de los métodos fordista y taylorista fue menor en Alemania que en otros países. Esa combinación de concentración de capital y fuerza laboral de cualificación relativamente alta fue el entorno en que surgió la idea de sustituir la caótica regulación económica del mercado, con sus ciclos expansivos y recesivos, por una regulación corporativista que repartiera la carga entre los trabajadores y el capital. Los líderes sindicales y los del SPD creían que eso ayudaría a superar tanto las crisis económicas como la lucha de clases, que se creía que era consecuencia de unos capitalistas poco razonables, por un lado, y unos trabajadores carentes de cualificación, rudimentarios y atrasados, por otro.

La idea de una regulación corporativista basada en el conocimiento científico y en la razón cobró mayor fuerza si cabe tras la fusión de las corporaciones industriales y los bancos en un único capital financiero. La regulación del crédito se pensó que sería una herramienta efectiva para el control de la producción industrial sin la injerencia de la volatilidad del mercado. La insistencia en la regulación económica en el plano de la empresa lleva implícito un rechazo de la regulación macroeconómica. Era una idea que no sólo compartían muchas personas dentro del movimiento obrero, incluso dentro de sus corrientes radicales, sino también entre las clases medias y dirigentes. El corporativismo en las empresas del sector oligopolista, por un lado, y un enfoque antikeynesiano, por otro, llegaron a constituir un punto de consenso que ha marcado el tono de la evolución económica y social de la Alemania Occidental desde la posguerra hasta el presente.

El modelo alemán de desarrollo económico, tal y como apareció tras la Segunda Guerra Mundial, no sólo se caracteriza por la continuidad institucional y un consenso entre clases que prioriza la prosperidad económica, la estabilidad política y el pacto social, sino también por estar fuertemente orientado a la exportación. La venta de productos de fabricación alemana en los mercados mundiales se ha considerado (y se sigue considerando hoy) prueba de su valor, además de un prerrequisito de la prosperidad. Por lo tanto, el consenso al que hacíamos referencia incluye también un proyecto mercantilista de conquista de mercados exteriores. Ese objetivo supremo de las políticas económicas ya había

sido establecido por la burguesía alemana, y aceptado por las principales corrientes del movimiento obrero, mucho antes de que la competitividad internacional se convirtiera en eslogan de la reestructuración neoliberal de la década de 1980. De hecho, ha sido algo que ha formado parte de la reinserción de la Alemania Occidental en el mundo capitalista tras la derrota del Tercer Reich. Así pues, ese corporativismo interior que ha marcado el desarrollo capitalista en Alemania desde sus inicios y que tomó una nueva forma con la transición de la dictadura fascista a una República democrática, aunque capitalista, se ha visto complementado con unas políticas mercantilistas de cara al mercado mundial. Ambas cosas han estado vigentes hasta la actualidad, aunque no siempre con los mismos resultados macroeconómicos a lo largo del último medio siglo.

Podemos dividir aproximadamente el periodo de posguerra en: (1) los grandes ciclos de crecimiento de las décadas de 1950 y 1960, (2) la década de transición de 1970, (3) los ciclos redistributivos de los años 1980 y 1990 y, por último, (4) una fase de estancamiento con tendencias deflacionarias que da comienzo tras el empeoramiento económico de 2001. Al igual que en otros países del núcleo capitalista, en el primero de esos tres periodos la producción total creció a un ritmo sin precedentes, pero la demanda nominal creció a un ritmo aún mayor. Fue en este periodo cuando los trabajadores consiguieron salarios reales más elevados y jornadas más reducidas. Aunque la producción total creció de la mano de las exportaciones, la vinculación del salario real al aumento de la productividad, principal resultado de la negociación colectiva en esos años, contribuyó a evitar la superproducción mediante el incremento del consumo de masas.

Sin embargo, ese desarrollo centrado en la exportación, que comparten Alemania y Japón, provocó una creación de supercapacidad productiva en el plano mundial que no era posible equilibrar mediante la pauta existente de crecimiento de los salarios reales y gasto público. Tal vez habría sido posible evitar esa distancia con respecto a la demanda global mediante el aumento de los salarios reales y/o del gasto público, pero en la práctica esa estrategia, que podríamos llamar «de keynesianismo de izquierdas», tenía pocas probabilidades de ser llevada a la práctica. Por cuatro razones. En primer lugar, el desarrollo tecnológico se ha vuelto cada vez más intensivo en capital o, en términos marxistas, la composición orgánica del capital ha aumentado, lo que ha hecho descender la tasa de ganancia. En segundo lugar, antes había una clase obrera que acababa de descubrir cómo mejorar sus condiciones de vida y sabía y estaba dispuesta a luchar para elevar los salarios nominales. En tercer lugar, la inflación, cuyo crecimiento se había acelerado durante esas luchas por la distribución de la renta, se consideró que acabaría constituyendo un obstáculo importante para las exportaciones. Por lo tanto, fue una mayoría de la clase dominante la que optó por unas políticas económicas restrictivas para rebajar la inflación y elevar los beneficios a través de la debilitación del poder negocia-

dor de los trabajadores. En cuarto lugar, incluso dentro del movimiento obrero, era sólo una minoría la que deseaba ir en la dirección del «keynesianismo de izquierdas». Las corrientes principales del movimiento habían aceptado la necesidad imaginada de disminuir la inflación, aunque ello implicara menores niveles de ocupación, que podían ir acompañados de políticas macroeconómicas restrictivas.

Ese giro antiinflacionista fue lo que provocó los ciclos redistributivos de los años de 1980 y 1990, cuyo principal rasgo fue una moderación del aumento salarial que tuvo dos efectos: (1) primero, se puso en marcha un proceso de desinflación y (2), después, el aumento de los salarios reales pasó a situarse por debajo del aumento de la productividad. A corto plazo, eso se tradujo en un aumento de la tasa de ganancia. Sin embargo, con el tiempo, debido a la ralentización del crecimiento del consumo de masas, el crecimiento total perdió impulso, incluidos los beneficios realizados. En esas condiciones de acumulación contenida, ni siquiera un nuevo recorte de la jornada de trabajo pudo evitar el descenso del empleo. El aumento del desempleo provocó también la ampliación de la distancia entre el salario bruto y el salario neto, ya que las prestaciones por desempleo se financian principalmente con las contribuciones que se deducen de las nóminas.

Esos dos procesos de acumulación contenida y desinflación llevaron a la economía alemana al punto del estancamiento y la deflación cuando la economía mundial pasó de una fase de expansión a otra de recesión en 2001. Por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, las exportaciones no lograron estimular la demanda interior. La prolongada austeridad fiscal, la limitación de los aumentos salariales y el aumento del desempleo llevaron a una situación en la que los trabajadores con salarios bajos, que gastan todos sus ingresos, se vieron forzados a recortar los gastos cada vez más y los trabajadores mejor pagados incrementaron el ahorro, ya que no podían confiar en la perspectiva de las ayudas sociales igual que en épocas anteriores. Ni siquiera el aumento de las exportaciones podía evitar el estancamiento de la economía.

En esas circunstancias, el corporativismo no es posible que genere la misma integración social. Para entender el porqué, es importante atender a dos principios básicos del estado del bienestar alemán. Uno es que desembolsos tales como, por ejemplo, las prestaciones por desempleo o las pensiones de jubilación salen principalmente de las deducciones de los salarios brutos. El otro es que la suma que recibe cada persona depende de su nivel salarial previo. Para compensar la crisis fiscal del estado del bienestar provocada por el fin de la prosperidad de la posguerra y la posterior aparición del desempleo masivo, esas cantidades se han ido poco a poco recortando a lo largo de las tres últimas décadas. Dado que, a pesar del aumento del número de personas con derecho a prestaciones sociales, las cantidades correspondientes a cada individuo han ido en descenso, la proporción del PIB destinada a gasto social se ha mantenido

constante. Pero eso sólo ha sido posible porque los salarios brutos nominales han aumentado a lo largo de esos años, con lo que ha aumentado también la base financiera de las contribuciones a la seguridad social.

Hoy en día, con la nómina total estancada o, incluso, disminuida, no sólo existe el problema del aumento de las personas con derecho a prestaciones sociales, sino también el de la falta de recaudación para financiar dichas prestaciones. La situación es aún peor por la tendencia de los patronos a convertir los trabajos regulares de jornada completa, que incluyen las prestaciones para los trabajadores, así como su contribución a la seguridad social, por trabajos precarios en los que los trabajadores quedan excluidos de cualquier prestación que vaya más allá de una mínima seguridad social. Así pues, el estancamiento económico ha provocado una crisis fiscal del estado del bienestar sin precedentes, y unas prestaciones cada vez menores para aquellos incapaces de ganarse la vida sin ese propio sistema. Aunque su edificio institucional siga en pie, el carácter del estado del bienestar parece que está pasando de ser el de una seguridad social garantizada, aunque con niveles distintos, para la enorme mayoría de la población, a convertirse en un sistema en proceso de polarización en el que los privilegios de la clase media y los estratos superiores de la clase trabajadora se mantienen a expensas de los trabajadores pobres, los desempleados y un número cada vez mayor de pensionistas. Desgraciadamente, aunque el número de estos últimos está creciendo, la resistencia que por lo general se opone a un cambio tan fundamental sigue siendo muy débil. La razón hay que buscarla en el cambio de composición de las clases, que ha erosionado la base social del estado del bienestar en su forma antigua.

Dada la amplia aceptación en Alemania de lo prioritario del crecimiento orientado a la exportación, el papel de un sindicalismo industrial fuerte era fundamental. Este no sólo contribuyó, como hemos explicado, a generar poder adquisitivo al presionar para lograr mayores salarios reales y asegurar la financiación del estado del bienestar, sino que la ideología productivista que los sindicatos industriales habían heredado de los sindicatos de artesanos evitó que existiera una gran resistencia de los trabajadores contra las innovaciones tecnológicas, lo que ayudó a mantener al país en la vanguardia de la competitividad en los mercados mundiales. Por eso, el deseo de aumentar las exportaciones y la imagen que los sindicatos tienen de sí mismos como contrapeso del capital han mantenido siempre una relación difícil pero duradera.

A moldear dicha relación ha contribuido enormemente —y sigue contribuyendo— el sindicato de los trabajadores del metal, IG Metall. Por diversas razones. IG Metall es la organización de los trabajadores de las industrias de máquinas-herramienta y automóviles, que son, como hemos visto, dos de los principales sectores de la economía alemana. También incluye a los trabajadores de la producción de acero, uno de los abastecimientos más importantes para las industrias de exportación. Además, todos esos sectores productivos



incluyen tanto grandes corporaciones como pequeñas y medianas empresas. Toda esa heterogeneidad se refleja en una escala salarial cuidadosamente equilibrada. Todos los distintos sectores y ocupaciones representados por IG Metall han llevado al sindicato a ocupar una posición desde la que determina en enorme medida el imaginario colectivo de la clase trabajadora alemana, a la vez que dirige la negociación colectiva y marca las tendencias que siguen los demás sindicatos.

IG Metall también controla el sindicato de los trabajadores de servicios, Verdi, que es, en términos de afiliación, aún mayor que el de los trabajadores del metal y organiza a empleados del sector público, del transporte y de los sectores comercial y financiero. Hay dos razones por las que IG Metall controla el sindicato del sector servicios. En primer lugar, este último fue el resultado de una fusión de sindicatos menores hace apenas un par de años y, por lo tanto, carece de la coherencia desarrollada por los sindicatos del metal a lo largo de muchas décadas. En segundo lugar, la ideología productivista prevaleciente, ampliamente compartida por todas las esferas sociales, considera a los trabajadores de servicios poco más que improductivos: trabajadores que generan un alto coste pero sólo una reducida ganancia. Desde esa perspectiva, el empleo en esos sectores se considera inferior al empleo en la producción industrial, que combina trabajadores cualificados y maquinaria tecnológicamente avanzada. Esa opinión ampliamente establecida y, por lo tanto, políticamente muy influyente, tiene su reflejo ideológico en la idea neoclásica de trabajo y capital como factores de producción que deben combinarse de la forma más eficiente y que no tienen nada que ver con que uno tenga poder sobre el otro y lo explote. Recogiendo todas esas ideas, IG Metall y otros sindicatos suelen intentar ejercer un papel de moderadores neutrales cuando se producen disputas laborales tanto en las plantas industriales como en la fábrica.

En conjunto, la posición que ocupan los sindicatos en el corporativismo alemán, de la cual el paradigma es IG Metall, es más bien ambigua. Por un lado, pretenden ser los organizadores y representantes de toda la clase trabajadora de un sector en particular frente al capital. Pero, por el otro, también controlan las acciones de lucha de los trabajadores que amenazan con ir más allá del consenso productivista y mercantilista que une a trabajo y capital. Normalmente, el equilibrio entre la integración corporativista y las reivindicaciones autónomas de los trabajadores se mantenía gracias a algo así como un «activismo controlado». Sólo en muy contadas ocasiones los sindicatos bien han abandonado completamente su autonomía para convertirse en parte del aparato estatal, bien se han mostrado incapaces de controlar las luchas obreras.

La moderación corporativista de las relaciones trabajo-capital siempre ha sido en cierto modo selectiva. La razón es que se considera que los trabajadores no cualificados realizan una contribución tan sólo marginal a la riqueza colectivamente producida, estigma que comparten con los trabajadores del sector ser-

vicios. Esa posición marginal los ha situado en un extremo de la escala salarial. No obstante, durante la prosperidad de la posguerra no eran tantos los trabajadores de esas características, y la distancia que los separaba del nivel salarial inmediatamente superior era bastante reducida. Aunque mal pagados, aún se los consideraba parte de la misma clase que los trabajadores cualificados.

La noción de una clase obrera única, por muchas que sean las diferencias en su seno, empezó a desmoronarse cuando el fin de la prosperidad de la posguerra dio paso a la reestructuración económica. Desde entonces y a lo largo de las tres últimas décadas, han surgido gradualmente dos divisiones que han socavado la base social del corporativismo. Primero está la división entre los trabajadores cuyas condiciones laborales están reguladas por los acuerdos de negociación colectiva y los que realizan trabajos precarios mal pagados y que, a menudo, son involuntariamente temporales o a tiempo parcial. Después está la llamada *cuña* entre el salario bruto y el neto, que surgió y se amplió con el aumento de las contribuciones a fin de financiar las prestaciones por desempleo, el seguro médico y las pensiones.

Los empresarios y los medios de comunicación burgueses han tenido gran éxito a la hora de explicar a los trabajadores representados por los sindicatos y con derecho al sistema de bienestar que cada vez es mayor el número de personas que se mantienen desempleadas de forma supuestamente voluntaria y que explotan el estado del bienestar financiado con las contribuciones a la seguridad social de los primeros. En lugar de enojarse por el desempleo masivo y por la presión que este imprime sobre las condiciones sociales de los que siguen conservando su empleo, cada vez gozan de mayor aceptación los deseos de la burguesía de recortar los gastos sociales, incluso entre muchos trabajadores que podrían necesitar pronto esa misma asistencia social. No obstante, el recorte de los gastos no sólo se aprueba por razones ideológicas. Existe también una amplia disposición a aceptar que las congelaciones o recortes salariales, así como las jornadas laborales más extensas, pueden preservar sus puestos de trabajo ya que, después de un despido, nadie espera ya encontrar un puesto regulado por los convenios colectivos y que ofrezca acceso a prestaciones. Aceptar un empleo precario parece ser la única forma de lograr un nuevo empleo.

La reducción numérica de la clase obrera ha sido sólo uno de los fenómenos que han tenido lugar en el curso de la reestructuración económica. La nueva clase media de los llamados profesionales —abogados, consultores y periodistas entre otros—, cuyas raíces se remontan a los primeros tiempos del capitalismo monopolista y que aumentaron enormemente su número durante el *boom* de la posguerra, ha logrado consolidar su posición. En parte, eso ha sido posible porque los profesionales se han convertido en una fuerza activa de la reestructuración económica y han aportado sus conocimientos y producido la propaganda que ha servido para que todos esos pasos parecieran la difícil pero inevitable vía hacia la prosperidad.

La posición que ocupa esa clase media depende mucho más de lo simbólico que del capital económico, lo que la diferencia de la burguesía. Por eso, sobre todo en épocas de estancamiento económico, la primera tiene miedo de perder su estatus. Para evitar que eso suceda, ha liderado la campaña por copar el estado del bienestar y expulsar de él a cada vez más personas de la antigua base obrera. Ideológicamente, eso ha tomado la forma de una «tercera vía» que se suponía que superaría los viejos esquemas de redistribución a través del estado del bienestar mediante un sistema capaz de activar a las personas y, por lo tanto, propiciar el crecimiento económico. En la práctica, las políticas de tercera vía no sólo han polarizado la distribución de las rentas, sino que han provocado también una fuerte transformación del SPD. Su electorado siempre había sido socialmente más amplio que la afiliación sindical. Sin embargo, esta última había sido siempre el núcleo del primero desde que sindicatos y SPD se convirtieron en las dos fuerzas principales de los trabajadores en Alemania. Sólo recientemente el núcleo de trabajadores cualificados se ha visto reemplazado cada vez más por la nueva clase media como base social del SPD. Políticamente, el movimiento obrero se enfrenta ahora a dos problemas: uno es cambiar su composición de clase, que ha debilitado las formas establecidas de representación sindical; el otro es que los sindicatos, ya debilitados de por sí, han dejado de contar con una contrapartida en el terreno político.

El desempleo masivo y la reestructuración económica han restado fuerza al bando de los trabajadores en el corporativismo alemán. Eso ha provocado la transformación del SPD en un partido de tercera vía y ha puesto a los sindicatos a la defensiva. Dado que el corporativismo —incluidos la negociación colectiva y el estado del bienestar, dos de sus componentes esenciales— formaba parte de un amplio consenso, el derrumbe de su base no sólo ha sacudido las organizaciones obreras, sino la totalidad del sistema. Dentro del aparato estatal e, incluso, en la conservadora CDU y en ciertos sectores de la burguesía —como las industrias artesanales, altamente reguladas—, existen corrientes que prefieren la moderación corporativista de las relaciones trabajo-capital a la combinación de unos mercados libres de cualquier restricción con un Estado autoritario. Existe, no obstante, una contradicción importante que hay que reconocer, una contradicción surgida de la crisis del corporativismo y que también determina la forma de afrontar la crisis. Sigue existiendo un amplio consenso sobre la necesidad del estado del bienestar y de las organizaciones obreras, pero tal consenso apenas si existe en el sistema parlamentario, donde lo que predomina es algo similar a un partido de unidad capitalista que presiona para rebajar aún más las condiciones sociales. Aunque a nadie le gustan los resultados, sus políticas se basan en otro consenso que lleva décadas vigente: es necesario pasar la prueba de los mercados mundiales. Para aumentar las exportaciones, la mayoría de las personas, de todas las distintas clases,

aceptan la idea de que es necesario rebajar los salarios y dismantelar el estado del bienestar e incrementar, así, la competitividad internacional.

La reacción de los sindicatos a esa contradicción y a la crisis del corporativismo ha sido abogar por el mantenimiento de un sistema de probada efectividad que, si ahora se ve sometido a presiones, es debido a una clase política mal orientada. Sin embargo, aunque la gran mayoría de sindicalistas, desde los miembros de base hasta los dirigentes, comparte la defensa del marco institucional del corporativismo, las razones estratégicas para hacer tal cosa van en dos direcciones distintas.

La reacción conservadora a la crisis del corporativismo adopta la retórica de la tercera vía cuando resalta que lo que se necesita son trabajadores altamente especializados para quienes la negociación colectiva suponga más una restricción a la creatividad que una protección social. Aunque la idea de que la negociación individual puede reportar mejores salarios que el convenio colectivo tal vez no sea más que una ilusión de las capas superiores de la clase trabajadora, el hecho es que las políticas de estos sindicatos defienden, en el mejor de los casos, los privilegios de las capas superiores de la clase trabajadora en contra de los de quienes tienen que trabajar más por salarios menores. Los intentos anteriores de organizar a toda la clase trabajadora en un sector en particular y nivelar sus divisiones internas es probable que se vean reemplazados por una marcada división entre la aristocracia obrera y el proletariado. El cambio no implicaría la desaparición de los sindicatos, sino tan sólo una transformación parecida a la que ha experimentado recientemente el SPD. La antigua asociación de los sindicatos con el SPD, ahora mismo en crisis, es posible que se restablezca si ambas partes deciden seguir la tercera vía.

Afortunadamente, existe oposición dentro de los sindicatos a esa nueva tendencia. En contra de la idea de la necesidad de recortar el gasto social, dicha oposición recomienda la adopción de políticas keynesianas para generar crecimiento económico y empleo y rebajar la presión a que se encuentra sometido el sistema fiscal del estado del bienestar. De ese modo sería posible mantener, o incluso mejorar, las condiciones sociales. Ya que el SPD se ha vuelto contrario a esa estrategia keynesiana y de defensa del estado del bienestar, lo que los sindicatos tienen que hacer es ampliar su radio de acción más allá de la negociación colectiva y entrar en la esfera política aliándose con movimientos sociales tales como el nuevo movimiento por la justicia social. Sería un gran paso adelante si quienes buscan una alianza con el movimiento por la justicia social llegaran a prevalecer por encima de quienes quieren tomar la tercera vía. Sin embargo, para que eso ocurra, hace falta superar algunos obstáculos.

El primero y más importante es que la política de tercera vía no sólo la proponen unos cuantos sindicalistas intelectuales, sino que cuenta también con una base social entre los afiliados. En las capas superiores de la clase trabajadora hay muchas personas que ven posible mantener sus empleos si aumenta la

competitividad y se cortan los lazos con las capas inferiores de dicha clase. La ideología productivista, que vincula la productividad y la renta a la educación formal, respalda ese punto de vista y, por lo tanto, representa un gran obstáculo para alcanzar una política sindical progresista.

Un segundo problema es que el keynesianismo suele verse como una vía hacia el pleno empleo que se apoya en la prosperidad económica. Sin embargo, es muy improbable, además de poco deseable por motivos ecológicos, que vuelva a haber tasas de crecimiento como las del periodo de posguerra. En una situación de crecimiento lento, incluso de estancamiento, no es estrictamente necesario recortar ni los salarios ni el gasto social. Lo que está claro es que, si estos se mantienen, ello interfiere en la tendencia del capital a aumentar los beneficios. Lo que era posible en tiempos de prosperidad —el reparto de un pastel cada vez mayor entre capital y trabajo— no es posible cuando las tasas de crecimiento son bajas. Por lo tanto, la idea corporativista de «la parte justa» de la renta hay que reemplazarla por algo que los patronos hace ya mucho tiempo que empezaron a hacer: exigir una parte mayor del pastel, aunque sea a expensas de la clase opuesta. Resulta irónico que los líderes de IG Metall y Verdi adoptaran un programa keynesiano que sólo han defendido tibiamente justo cuando empezaban a tambalearse las condiciones sociales y económicas necesarias para su aplicación. Con el presente predominio del estancamiento económico y con una fuerte polarización entre la nueva clase media y los trabajadores en condiciones precarias, cualquier intento de convencer al Partido Socialdemócrata de que regrese al keynesianismo está destinado al fracaso.

La convocatoria de elecciones federales por el SPD en 2005 indica claramente que la tercera vía es un callejón sin salida. Así pues, se plantea la cuestión de si el movimiento obrero debería intentar reinventar las políticas keynesianas para perseguir sus objetivos más inmediatos, o si lo que debe hacer es desarrollar nuevas estrategias que reflejen los cambios económicos y sociales que han provocado el agotamiento del keynesianismo. No se trata únicamente de que las principales corrientes dentro de los sindicatos reclamen ahora una orientación estratégica de ese tipo, sino que, como decíamos antes, algunos sindicalistas ya han empezado a construir un nuevo partido, llamado Alternativa Electoral por el Empleo y la Justicia Social (WASG), que intenta erigirse en nuevo portavoz de las tradiciones keynesiana y corporativista del SPD.

Dicho empeño sólo ha progresado en la mitad occidental de Alemania. Las ideas de la estimulación fiscal y la redistribución no estuvieron presentes en la mitad oriental hasta la unificación, momento en que esas medidas habían perdido ya gran parte de su atractivo y su eficacia durante la posguerra. Además, la reducción industrial que acompañó a la transformación hacia el capitalismo de la mitad oriental provocó una acumulación de deuda sin precedentes, lo que contribuyó aún más a desacreditar la noción de gasto público. Dicho escepticismo se articula en torno al Partido por el Socialismo Democrático (PDS),

sucesor del antiguo partido gobernante Partido de Unidad Socialista que, además, representa también el fracaso del socialismo de estado. Aunque sigue sin lograr desarrollar una nueva política socialista, continúa articulando la profunda insatisfacción con un capitalismo que prometía prosperidad pero acabó produciendo paro y declive económico.

Conscientes de los límites regionales tanto del WASG como del PDS, los líderes de ambos partidos han decidido que sólo si suman fuerzas tienen alguna oportunidad de lograr articular unas políticas progresistas en el nivel federal, cosa que resulta bien evidente en puros términos electorales. Dado que los partidos tienen que superar el umbral del 5% del total de votos, ambas formaciones tienen posibilidades de fracasar si se presentan solas al Parlamento, pero lo más probable es que logren estar presentes si concurren unidas.

La alianza entre ambos partidos, que arrastran consigo el historial del socialismo de estado en el Este y del capitalismo del bienestar en la mitad occidental, representa un gran avance, como pone de manifiesto el furor histórico que ha desencadenado entre los comentaristas neoliberales de los principales medios de comunicación. El futuro de esa alianza de izquierdas, por muy oscuro que esté por la historia, depende de que el rechazo de la clase trabajadora a un régimen neoliberal siga en aumento. En el preciso momento en que nació la alianza, las encuestas señalaban que la mayoría de los alemanes rechazaban la constitución capitalista que se ha propuesto para Europa. La alianza surgió en medio de duras disputas, y la virulencia de determinadas críticas sectarias de la izquierda sólo se puede comparar con la histeria de los comentaristas neoliberales, aunque las primeras no carezcan completamente de base. Sin embargo, el hecho sigue siendo que la nueva alianza parece capaz de atraer a muchos de los que se sienten defraudados por el estancamiento actual del capitalismo, por la polarización social y por la falta manifiesta de alternativas políticas. Tal vez este nuevo intento de construir una sociedad más igualitaria y más libre surgido de dicha frustración acabe aprendiendo de los fracasos pasados de los trabajadores, tanto en el Este como en Occidente.